

XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán, 2007.

Las izquierdas argentinas y el golpe de Estado de 1976: el caso del Partido Comunista de la Argentina.

Cernadas, Jorge (UBA - UNGS) y Tarcus, Horacio (UBA - CeDInCI; SECyT - ECOS).

Cita:

Cernadas, Jorge (UBA - UNGS) y Tarcus, Horacio (UBA - CeDInCI; SECyT - ECOS). (2007). *Las izquierdas argentinas y el golpe de Estado de 1976: el caso del Partido Comunista de la Argentina. XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-108/688>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eU8X/WN9>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

XI° JORNADAS INTERESCUELAS / DEPARTAMENTOS DE HISTORIA

Tucumán, 19 al 22 de septiembre de 2007

Título: “Las izquierdas argentinas y el golpe de Estado de 1976: el caso del Partido Comunista de la Argentina”

Mesa Temática Abierta n° 78: “Las izquierdas argentinas, 1955-1983. Estudios de caso y problemas de su abordaje histórico”

Universidad, Facultad y Dependencia: UBA/UNGS y UBA/CeDInCI

Autores:

-CERNADAS, Jorge. Profesor Adjunto UBA/UNGS.

A. J. Carranza 2370 – 6to. “C” – (1425) CABA

Tel. (011) 4773-0189 – jcernada@ungs.edu.ar

-TARCUS, Horacio. Profesor Titular UBA, miembro de la C.D. del CeDInCI.

Fray Luis Beltrán 125 – (1406) CABA

Tel. (011) 4631-8893 – htarcus@cedinci.org

LAS IZQUIERDAS ARGENTINAS Y EL GOLPE DE ESTADO DE 1976: EL CASO DEL PARTIDO COMUNISTA

Jorge Cernadas* y Horacio Tarcus**

Introducción

Este trabajo procura dar continuidad a uno previo, destinado a examinar los posicionamientos públicos de las principales organizaciones de la izquierda argentina ante la crisis del tercer peronismo, el golpe de Estado de 1976 y el tramo inicial de la prolongada dictadura que éste inauguró¹. En esta oportunidad, el análisis se orienta específicamente al Partido Comunista de la Argentina (PCA), fundamentalmente a través del abordaje de sus resoluciones y declaraciones oficiales de los años 1975-1977, y, secundariamente, de otros documentos partidarios. Se trata, naturalmente, de una primera aproximación al tema, que deberá completarse en el futuro con el tratamiento de un *corpus* de fuentes más vasto, tanto escritas como orales.

* UBA/UNGS.

** CeDInCI/UBA.

¹ J. Cernadas y H. Tarcus: “Las izquierdas argentinas y el golpe del 24 de marzo de 1976. Una selección documental”, en **Políticas de la Memoria** n° 6/7, Buenos Aires, verano de 2006/2007, pp. 29-78.

En los críticos años 1975-1976, el PCA esbozó una línea política congruente tanto con su tradicional afán “legalista” y su preocupación por no alejarse excesivamente de las orientaciones de la URSS para el país y la región, como con la preservación de su aparato partidario, en un contexto político (que se esbozará aquí brevemente) crecientemente represivo. Para ello, insistió en diferenciarse públicamente de lo que designaba como “ultraizquierda” (particularmente la armada), bregando por fórmulas institucionales que implicaban de hecho acotar el poder efectivo de la presidente “Isabel” Perón y su influyente “entorno” lopezrreguista, y por la constitución de un gabinete (y luego de un gobierno) de coalición cívico-militar “progresista” después, todo ello en nombre del retorno a las “pautas programáticas” votadas en 1973. Finalmente, producida la intervención militar, se esmeró por diferenciar corrientes opuestas dentro del gobierno y las FF.AA., respaldando a un ala presuntamente “moderada” liderada por el presidente Videla y alentando una “convergencia cívico-militar” con la misma, al tiempo que centraba sus críticas en la gestión económica “liberal” del ministro Martínez de Hoz y en las acechanzas de lo que denominaba “ala pinochetista” del poder militar.

*

Del tercer peronismo a la dictadura del '76

Hoy caben pocas dudas acerca de que la crisis del tercer gobierno peronista y la intervención militar de 1976 que le puso fin constituyen un punto de inflexión mayor en la historia argentina del siglo XX, tanto por aquello que la dictadura procesista vino a destruir, como por las herencias que, en su faz “productiva”, logró instalar perdurablemente.

Con independencia de antecedentes más lejanos, las raíces inmediatas del golpe pueden ubicarse en la rápida erosión y crisis del compromiso populista que intentó revitalizar Perón a su regreso al poder estatal en octubre de 1973, compromiso cristalizado en la fórmula de la “democracia integrada” (articulación del “pacto social” corporativo con un acuerdo de gobernabilidad con la oposición política “leal”, especialmente la UCR), fórmula proclamada por el viejo líder como base de un nuevo “modelo argentino”. La figura de Perón apareció, en 1973, como la encarnación política visible de un polo de poder que logró aglutinar a amplios y heterogéneos sectores sociales, incluidos la inmensa mayoría de los trabajadores y otros sectores populares. Sin embargo, las dificultades de la “democracia integrada”, tanto para encauzar

institucionalmente la formidable conflictividad social y política emergente tras el “Cordobazo” de 1969, y prolongada bajo el breve interregno camporista, como para relanzar la acumulación capitalista con el sustento de una alianza social y política diferente de aquella que había cobrado forma en los arrogantes tiempos iniciales de la “Revolución Argentina” de 1966-1973, se hicieron evidentes muy tempranamente. Ya a partir de 1974 (aunque más nítidamente tras la muerte de Perón en julio de ese año) y, sobre todo, a partir del fracaso del “Rodrigazo” a mediados de 1975, comenzó a articularse rápidamente otro polo de poder en torno de las FF.AA., y crecientes sectores empresariales, políticos, eclesiásticos, periodísticos, etc., se lanzaron a proclamar abiertamente que no había otra “solución” a la crisis argentina que una brutal salida de fuerza, salida en la cual convergieron, a comienzos de 1976, también múltiples actores, tanto internos como externos.

*

En ese escenario², y en términos generales, las izquierdas argentinas parecen haber recortado privilegiadamente un doble defasaje para trazar sus líneas de intervención política. El primero de ellos remitía a los desajustes entre las enormes expectativas acumuladas por los sectores populares (tanto en términos de reparación por los largos años de proscripción política, como de vuelta a la bonanza de los primeros gobiernos peronistas), y las magras realidades ofrecidas en lo inmediato a esos sectores por el “Pacto Social”, piedra angular del proyecto de Perón, quien insistía en que dicho convenio era también un “pacto político” que no debía ser quebrado bajo ninguna circunstancia. Un segundo defasaje remitía al hiato subsistente entre aquellas expectativas populares, inscriptas aún mayoritariamente en el ideario y la identidad política peronistas, y los horizontes contrahegemónicos de largo alcance de las izquierdas, particularmente de sus vertientes revolucionarias, desde los tumultuosos y esperanzados días de la retirada del gobierno militar lanussista. La misma realización de elecciones generales con participación del peronismo (luego de casi 18 años de proscripción) les habían planteado complejos desafíos: sus diversas expresiones oscilaron entre el voto en blanco y el “apoyo crítico” al movimiento policlasista, a su vez más heterogéneo internamente que nunca antes. Cabe señalar aquí la casi general subestimación de la densidad de esas expectativas populares y de su adscripción

² Retomamos en esta sección algunos párrafos de un trabajo previo: A. M. Barletta y J. Cernadas: “De la ‘démocratie intégrée’ au terrorisme d’ Etat: 1973-1976”, en **Matériaux pour l’histoire de notre temps** n° 81, Paris, Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine, janvier-mars 2006.

político-identitaria mayoritaria (de nuevo, particularmente en las izquierdas revolucionarias), tanto como la dificultad para traducir en términos políticos y programáticos viables aquellos horizontes propios, en un contexto político rápida pero profundamente alterado desde el aún cercano enfrentamiento a la dictadura militar. En el primer defasaje señalado, algunas vertientes de la izquierda sólo parecen haber percibido una preciosa oportunidad de resolver la contradicción que aquél conllevaba en favor de las clases populares (y, simultáneamente, de alcanzar un ascendiente sobre las masas que les era esquivo desde los años '40), minimizando —cuando no directamente omitiendo— la potencial capacidad de recomposición de sus adversarios de dentro y fuera de la alianza gobernante, y la consiguiente posibilidad de resolución de aquella contradicción a expensas, y no a favor, de los sectores subalternos (y de las propias izquierdas). A este respecto, gran parte de la literatura existente ha remarcado la “descolocación”, en particular de las formaciones de la “nueva izquierda” revolucionaria, en el nuevo escenario político abierto en 1973, atribuyéndola en gran medida sea a los déficit de sus propias concepciones de la política y lo político³, sea a sus “errores” de apreciación del campo de fuerzas del momento, o bien a su propia “inmadurez” o inexperiencia políticas, en tanto organizaciones en muchos casos de reciente creación. Asimismo, se ha argumentado que el crecimiento orgánico de tales formaciones en el interior de las fuerzas sociales movilizadas desde fines de los años sesenta era aún molecular hacia 1973⁴.

En cualquier caso, lo cierto es que sus adversarios, en un contexto de agudización del enfrentamiento político y clasista, comenzaron a producir temprana y vertiginosamente hechos y discursos contundentes, tanto los que podían inscribirse formalmente dentro de la nueva legalidad liberal-democrática restablecida en 1973, como los que caían abiertamente fuera de ella. Entre los primeros, cabe contabilizar el propio desplazamiento de Cámpora de la presidencia, la sanción de una nueva Ley de Asociaciones Profesionales que reforzaba el poder interno de la burocracia sindical tradicional para enfrentar los desafíos de las corrientes gremiales combativas; la reforma de orientación represiva del Código Penal, que restablecía medidas de la

³ Tal lo que sucede, especialmente, en algunos ensayos de los años '80, fuertemente permeados por la revalorización de la institucionalidad democrática posterior a 1983. Véase, por ejemplo, M. M. Ollier: **El fenómeno insurreccional y la cultura política**, Bs. As., CEAL, 1986; C. Hilb y D. Lutzky: **La nueva izquierda argentina: 1960-1980 (Política y violencia)**, Bs. As., CEAL, 1984.

⁴ O. Landi: “La tercera presidencia de Perón: gobierno de emergencia y crisis política”, **Documento CEDES/CLACSO** n° 10, Buenos Aires, 1978.

anterior dictadura militar; la promoción del poderoso secretario privado de Perón y ministro de Bienestar Social, José López Rega, de modesto cabo de la policía a comisario general... Entre los segundos, la masacre de Ezeiza, nunca investigada oficialmente; la destitución del gobernador de Córdoba, cercano a la “Tendencia Revolucionaria” del peronismo hegemonizada por Montoneros, por parte del jefe de policía local, hecho conocido como el “navarrazo” y convalidado por el presidente Perón; las primeras acciones públicas de la banda paraestatal de ultraderecha conocida como “Triple A” desde fines de 1973... Estamos lejos, como se ve, de la benévola figura pacificadora del “león herbívoro” con la que Perón gustó presentarse a su retorno del exilio, y más cerca de los estrechos límites de la “democracia integrada” para procesar dentro de la legalidad la aguda crisis política que pretendía encauzar. Igualmente, aquélla suponía desafíos políticos mayúsculos para las formaciones de izquierda, que procuraron ensayar respuestas diversas, políticas y político-militares, aunque su destino común resultaría a la postre la derrota. También en aquellos límites quizá radique una de las claves de la creciente “militarización” de las prácticas políticas de algunas de las principales organizaciones armadas peronistas y marxistas (proceso que sin embargo no parece haber resultado contradictorio con su crecimiento “cuantitativo” previo al golpe⁵), llevadas al terreno que, por otra parte, más convenía a sus adversarios para aislarlas y eliminarlas, y abriendo de paso la puerta a la relegitimación de las fuerzas armadas como actor político. Ésta tuvo una oportunidad relevante a propósito de las tareas de represión del foco de guerrilla rural lanzado por el Ejército Revolucionario del Pueblo en la provincia de Tucumán, en el llamado “Operativo Independencia”, verdadero banco de prueba de los métodos de represión clandestina que se generalizarían tras el golpe de Estado de 1976.

Tras la muerte de Perón, una alianza temporaria entre el llamado “entorno” de la nueva presidente Isabel Perón –encabezado por López Rega– y la burocracia sindical peronista abandonó lo que quedaba del Pacto Social, forzando la renuncia de su artífice, el ministro de Economía Gelbard, y ajustó cuentas con los núcleos antiburocráticos de disidencia gremial (representados por dirigentes como Agustín Tosco, René Salamanca y Raimundo Ongaro) y con los funcionarios afines a la izquierda peronista subsistentes en el aparato estatal. Estos conflictos se tramitaban en un cuadro de acelerada crisis y

⁵ R. Gillespie: **Soldados de Perón. Los Montoneros**, Buenos Aires, Grijalbo, 1987; P. Pozzi: **“Por las sendas argentinas...” El PRT-ERP. La guerrilla marxista**, Buenos Aires, Eudeba, 2001.

reversión del largo ciclo populista que había consolidado en los años cuarenta el mismo movimiento gobernante⁶. Tras el frustrado intento de ajuste “gradualista” comandado por un economista “histórico” del primer peronismo, Gómez Morales, a mediados de 1975 Isabel Perón y el “entorno” lopezrreguista intentaron un drástico cambio de alianzas y de orientación económica, a través del llamado Plan Rodrigo, que involucraba un alejamiento categórico de las líneas tradicionales de la economía del peronismo, y la apuesta a un esquema de poder que, empezando por el frontal ataque a la “columna vertebral” del movimiento (los sindicatos), poco o nada tenía que ver ya con el agonizante “modelo nacional-popular”. Aunque la CGT (temerosa de verse desbordada por el malestar y la intensa movilización de hecho de sus bases) consiguió bloquear el proyecto gubernamental decretando la primera huelga general contra un gobierno peronista, y producir el desplazamiento del elenco que lo impulsaba, logró algo cercano a una victoria pírrica, en lo que acaso constituyó la última expresión de esa clase obrera “madura” caracterizada por Juan Carlos Torre⁷.

El fallido “desempate” intentado mediante el Plan Rodrigo, amén de desorganizar brutalmente la economía y profundizar las disidencias internas en el movimiento y el gobierno peronistas, colocó en primer plano la beligerancia política cada vez más visible de los sectores económicos predominantes⁸, que empezaron a denunciar el “excesivo” poder de los dirigentes sindicales –aun de los negociadores, que la izquierda consideraba “traidores” al movimiento obrero– como una “amenaza” que podría desembocar, en última instancia, en el “colectivismo”. A la temprana oposición de los grandes terratenientes pampeanos, se agregó la de otros sectores patronales, nucleados en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), promotora de una campaña periodística sistemática y de un *lock-out* patronal ya claramente orientados hacia el golpe de Estado, mientras los dirigentes sindicales, por su parte, criticaban el desabastecimiento, la especulación y la demanda de liberalización de precios y de pauperización de la clase obrera como el “verdadero terrorismo económico y social”. El aliento al golpe fue acompañado también por la inercia — cuando no la complicidad abierta— de numerosas fuerzas políticas “democráticas”, por los grandes medios de prensa, como los diarios **La Nación** y **La Prensa**, y por

⁶ H. Tarcus: “La crisis del Estado populista: Argentina, 1976-1990”, en **Realidad Económica** n° 107, 1992.

⁷ J.C. Torre: **Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976**, Buenos Aires, CEAL, 1983.

⁸ R. Sidicaro: **Los tres peronismos**, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.

connotados voceros de la poderosa y conservadora Iglesia católica, como los monseñores Bonamín y Tortolo, quienes, en la segunda mitad del año '75, ya profetizaban la proximidad de “un proceso de purificación” encabezado por las fuerzas armadas. Éstas, por su parte, encargadas desde 1975 del “aniquilamiento de la subversión” por disposición del Poder Ejecutivo nacional, se instalaron en una posición de aparente “profesionalismo” y “prescindencia” política que, en realidad, encubría su cuidadosa preparación para hacerse del poder del Estado en el momento que juzgaran propicio. Algunas espectaculares acciones de las principales organizaciones armadas (Montoneros y ERP) en Formosa y en el Gran Buenos Aires, sintomáticas del fracaso de su estrategia en el terreno estrictamente militar, y, más aún, de su creciente aislamiento político (producto, en parte, de su accionar exclusivamente clandestino desde 1974), crisparon aún más el clima político a fines de 1975 y principios de 1976.

*

La nueva dictadura, inaugurada sin mayores oposiciones en marzo de 1976, ya no se autotituló pomposamente “Revolución”, como sus predecesoras de 1955 y 1966, sino, en apariencia más modestamente, “Proceso de Reorganización Nacional”, aunque en realidad encarnó un proyecto mucho más ambicioso que aquéllas: la salvaje “reorganización” de una sociedad que había desafiado el orden y la autoridad en múltiples ámbitos de la vida social, y no sólo en el terreno más visible de los enfrentamientos en los grandes escenarios de la política. La “revolución” era ahora algo que debía ser combatido y conjurado en todos los frentes, incluso el del lenguaje. El nuevo régimen apuntó, sin dudas, a desandar el camino de movilización y politización que la clase trabajadora y otros sectores subalternos habían recorrido desde 1969. Pero, aprovechando el vaciamiento del proyecto de poder del gobierno peronista y el reflujo y la desmoralización de aquéllos tras las jornadas del “Rodrigazo”, en lo interno, y la crisis e incipiente reestructuración del capitalismo mundial, en lo externo, comenzó a ejecutar, en nombre de la lucha contra la “subversión” (elemento aglutinante de las distintas corrientes internas de las fuerzas armadas), una revancha clasista cuyo alcance excedía ampliamente al ciclo abierto con el “Cordobazo”, para alcanzar a los avances que los sectores subordinados habían logrado desde la década del '40.⁹ En este sentido, la dictadura inició el “desempate” que el mismo gobierno peronista había intentado transitar, infructuosamente, con el “Rodrigazo” de mediados de 1975, logrando dejar

⁹ G. O'Donnell: “Democracia en la Argentina: micro y macro”, Buenos Aires, 1983.

sentadas “herencias” bien conocidas, que condicionarían poderosamente el rumbo ulterior de la economía, la sociedad y la política argentinas: liquidación física de numerosos cuadros políticos de las clases populares, descomunal endeudamiento externo, deterioro de las capacidades institucionales del Estado, concentración económica de las capas propietarias y fragmentación de las clases subordinadas, brutal regresividad en la distribución del ingreso, etc. Como señalara provocativamente Perry Anderson en Buenos Aires en 1987 –cuando se apagaban los tenues brillos iniciales de la “transición democrática”–, los nuevos regímenes democráticos de la región, incluido el argentino, se erigieron sobre una *derrota*, y no sobre una victoria, de las clases populares¹⁰, elemento clave para entender la continuidad de la expropiación material y simbólica de la que éstas siguieron siendo objeto en las dos décadas siguientes, décadas de plena “estabilidad democrática” para los parámetros argentinos de gran parte del siglo XX.

*

El Partido Comunista: de la “Patria liberada” a la “convergencia cívico-militar”

Las perspectivas específicas adoptadas ante el golpe de Estado por las diversas fuerzas políticas y político-militares de izquierdas oscilaron entre el apoyo desembozado al mismo por parte de las vertientes más “liberales” y antiperonistas del viejo socialismo (PS-Democrático o “ghioldista”), y la acentuación del enfrentamiento político-militar al nuevo régimen, en clave de “guerra civil revolucionaria” (PRT-ERP) o de “guerra integral” (Montoneros).

El Partido Comunista, pese a la fuerte erosión sufrida en su antiguo prestigio como detentador del “marxismo-leninismo” legítimo, especialmente en los quince años transcurridos desde la caída de Perón en 1955¹¹, continuaba siendo a comienzos de la década del ’70 una fuerza política no despreciable en el seno de las izquierdas argentinas, tanto por su influencia en diferentes sectores medios estudiantiles y

¹⁰ P. Anderson: “Dictadura y democracia en América Latina”, en **Democracia y socialismo. La lucha democrática desde una perspectiva socialista**, Buenos Aires, Tierra del Fuego, 1989.

¹¹ Erosión manifestada tanto en la multiplicación de opciones políticas de izquierda no comunista, como en las propias deserciones y escisiones que afectaron al PCA desde comienzos de los años ‘60, entre las que destacan las de jóvenes cuadros intelectuales (grupos *Pasado y Presente* y *La Rosa Blindada*), y la producida en 1967/68, que arrastró a buena parte de la Federación Juvenil partidaria, y daría origen a la fundación del Partido Comunista Revolucionario. A ello cabe agregar la creciente heterogeneización y crisis del movimiento comunista internacional, contexto en el que la veterana dirección del PCA se mantuvo fiel a las orientaciones del PCUS. Cf. Lilly Marcou: **El movimiento comunista internacional desde 1945**, Madrid, Siglo XXI, 1981, especialmente caps. 2 y 3.

profesionales y, en menor medida, populares, como por su número de afiliados y simpatizantes y su vasto aparato institucional, amén de sus fluidos contactos con los grandes partidos (especialmente los no peronistas) y con núcleos de la burocracia estatal, empresarios, cuadros militares, etc.¹² Congruente con un perfil “legalista” cristalizado a lo largo de cuatro décadas, y no obstante el formal estado jurídico de ilegalidad impuesto por el régimen militar, el PCA había participado en las elecciones de marzo de 1973, diseñadas por el gobierno lanussista como salida de la “Revolución Argentina”, respaldando a la Alianza Popular Revolucionaria (alendismo y Partido Revolucionario Cristiano), acaso ilusionado en jugar un papel clave como tercera fuerza en un hipotético *ballotage* entre el FREJULI (liderado por el peronismo) y la UCR, eventualmente en apoyo de esta última¹³. Fallido este pronóstico, y tras el rápido desplazamiento de Héctor Cámpora de la presidencia, el XIV Congreso Nacional partidario, celebrado en agosto de 1973 bajo el lema “Por la Patria liberada, al socialismo”, definió positivamente al gobierno peronista como “reformista burgués”, y resolvió el apoyo a la candidatura de Perón en las nuevas elecciones a realizarse en septiembre, actualizando una fórmula -acuñada en 1946- que señalaría su conducta en caso de un (esperable) triunfo peronista: “apoyar lo positivo y criticar lo negativo” de la acción de gobierno¹⁴. Ello no obstó para que prosiguiera insistiendo, como lo venía haciendo desde hacía décadas, en la necesidad de agrupar a todas las fuerzas “antioligárquicas y antiimperialistas” en un amplio “Frente Democrático Nacional”, congruente con la tradicional visión estratégica acerca de las etapas que, según el PCA, seguiría necesariamente el proceso revolucionario en la Argentina.

¹² Cf. J. Cernadas, R. Pittaluga y H. Tarcus: “La historiografía sobre el Partido Comunista de la Argentina: un estado de la cuestión”, en **El Rodaballo** nro. 8, 1998, especialmente la sección “Núcleos problemáticos y cuestiones de periodización”, y D. Campione: “Hacia la convergencia cívico-militar. Partido Comunista y Frente Democrático”, 1955-1976”, ponencia presentada a las II Jornadas de Historia de las Izquierdas, Buenos Aires, CEDINCI, octubre de 2002, pp. 9-10. Sobre el trabajo partidario en el seno de las fuerzas armadas, hay interesantes referencias en Isidoro Gilbert: **El oro de Moscú**, Buenos Aires, Planeta, 1994. No conocemos estimaciones precisas acerca del número de afiliados partidarios, aunque el propio PCA se atribuye –seguramente con exageración- unos 100.000, y 40.000 en su Federación Juvenil, a comienzos de 1974 (cf. CE del PCA: “Por un 1ro. de Mayo de unidad y lucha para detener la escalada derechista e impulsar el proceso de liberación”, en **Resoluciones y Declaraciones del Partido Comunista de la Argentina 1974**, Buenos Aires, Anteo, 1975, p. 32).

¹³ Tal es la perspectiva sugerida por Ernesto Giudici, por entonces veterano y alto dirigente del PCA (renunciante al mismo a fines de 1973 por disentir con su “posición reformista adherida de más en más al liberalismo y formalismo democrático-burgués”), en **Carta a mis camaradas**, Buenos Aires, Granica, 1973, p. 135. La fórmula Alende-Sueldo sostenida por la APR se ubicó en cuarto lugar, con el 7,43 % de los votos.

¹⁴ Sobre el origen de tal fórmula en el XI Congreso del Partido, realizado tras la victoria de Perón en 1946, véase C. Altamirano: “Una, dos, tres izquierdas ante el hecho peronista”, en **Peronismo y cultura de izquierda**, Buenos Aires, Temas, 2001, pp. 13-26.

El Partido criticó diversos aspectos parciales de la corta gestión de Perón (por ejemplo, la Ley de Asociaciones Profesionales, la reforma del Código Penal, o su creciente tolerancia hacia actos represivos), aunque también destacó los que consideraba logros de la misma en el camino de la “liberación nacional”, tales como los tibios proyectos de legislación agraria antilatifundista del secretario del área, Horacio Giberti, los atisbos de una política exterior y militar más autónoma de las orientaciones estadounidenses, y, especialmente, los convenios comerciales y financieros con los países socialistas promovidos por el ministro José Gelbard¹⁵. En un registro cercano al consejo, en los primeros meses de 1974 los documentos partidarios ya sugerían a Perón la necesidad de conformar un gobierno de coalición democrática para aventar una escalada de la derecha y los riesgos de interrupción del proceso institucional, con la mira puesta en los recientes golpes de Estado en Chile y Uruguay. Tras la muerte de Perón en julio de 1974, el PCA –al igual que otras fuerzas políticas de la “oposición leal”– mantuvo inicialmente una actitud expectante (y vigilante) ante el nuevo gobierno encabezado por su viuda, “Isabel”, aunque comprometiendo formalmente, en clave justicialista, “la solidaridad del Partido Comunista en la tarea de forjar la unidad nacional para conquistar la definitiva independencia política, la soberanía económica y la justicia social”¹⁶.

No obstante esta declamada buena disposición, pronto se hizo claro que los nuevos elencos a cargo del Estado, lanzados a una sedicente “peronización” del gobierno, optaban por un “rumbo derechista” que el PCA presentaba tempranamente, no como una profundización de rasgos ya discernibles con claridad en la breve gestión del caudillo desaparecido, sino como un creciente y peligroso alejamiento de las “pautas programáticas” votadas masivamente en 1973, y de las propias orientaciones políticas enunciadas por el último Perón¹⁷. Las advertencias al gobierno isabelino por las eventuales consecuencias de este nuevo rumbo (rumbo que incluyó la defenestración del ministro de Economía Gelbard, ex-titular de la CGE con estrechas relaciones con el PCA, la expansión de la represión ilegal y el establecimiento del estado de sitio), se

¹⁵ El CE, en un documento del 01/09/74, consideraba a estos últimos “la conquista de mayor trascendencia del gobierno justicialista” (“Se aproxima el momento de las definiciones”, en **Resoluciones y Declaraciones del Partido Comunista de la Argentina 1974**, cit., p. 65).

¹⁶ “El Partido Comunista ante la muerte del Presidente Perón”, telegrama del secretario general del PCA a la Presidente María Estela Martínez de Perón, 01/07/74, en **Resoluciones y Declaraciones del Partido Comunista de la Argentina 1974**, cit., p. 54. Cf. Asimismo la declaración del CE “Ante la muerte de Perón”, de la misma fecha, en *idem*, pp. 55-56.

centraban en la posible "frustración" del "proceso de liberación" puesto en marcha en 1973 y en el peligro de un golpe de estado "reaccionario", favorecidos por el creciente "aislamiento" del gobierno respecto de las "fuerzas democráticas y progresistas", entre las que el PCA tácitamente se incluía. Esas advertencias, enunciadas desde un lugar implícito de monitor y guía del proceso político, pueblan crecientemente tanto los documentos partidarios oficiales de la segunda mitad de 1974, como las páginas del diario frentista **La Calle**, publicado con financiación del PCA entre octubre y diciembre de ese año¹⁸, aunque en general evitaban las críticas en bloque al gobierno, para centrarlas en los sectores de derecha "de dentro y fuera" del mismo, y también en la "ultraizquierda" armada y no armada. Una declaración del CC emitida el 29 de diciembre de 1974 ilustra bien el diagnóstico y las propuestas partidarias en la coyuntura política del momento:

"Una vez más se está demostrando que un partido solo, no puede resolver una tarea de la envergadura histórica que afronta la Argentina. Para ello es preciso la coordinación de las organizaciones obreras, de los partidos políticos populares, de los militares patriotas, de las organizaciones de los campesinos trabajadores, de los estudiantes e intelectuales, de la pequeña y mediana burguesía comercial e industrial, de los jóvenes y mujeres; en fin, de la inmensa mayoría para hacer frente a la minoría que se propone fascistizar el gobierno para que el país siga girando en la órbita del imperialismo yanqui y para mantener y fortalecer la estructura latifundista del agro argentino".¹⁹

A comienzos de 1975, frente al tangible enrarecimiento del clima político, que ya incluía crecientes rumores acerca de un posible golpe de Estado, el CC del PCA reclamaba a "la señora Presidente" la reanudación y fortalecimiento de instancias de "diálogo" entre el gobierno y las fuerzas políticas no peronistas, entidades sindicales y empresarias, y el alejamiento de ministros como López Rega (Bienestar Social), Ivanissevich (Educación) y Otero (Trabajo), señalando que "el abandono de las pautas programáticas, por la acción de la derecha profascista, ha dado pretexto al terrorismo de ultraizquierda, método (sic) tan perjudicial para el país y para el proceso de liberación". En consecuencia, la "coordinación" reclamada por el PCA a fines de 1974 actualizaba ahora la propuesta concreta de "constitución de un gabinete de amplia coalición

¹⁷ CE del PCA: "¡Actuar mientras aún es tiempo!", 27/09/74, en **Resoluciones y Declaraciones del Partido Comunista de la Argentina 1974**, cit., pp. 75-77.

¹⁸ Sobre esta efímera empresa editorial (clausurada por disposición del Poder Ejecutivo tras la publicación de una carta abierta de su directora, Martha Mercader, a Isabel Perón, que sugería la responsabilidad gubernamental en acciones de represión ilegal), véase G. Vommaro: **La Calle, el diario de casi todos**, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, Cuaderno de Trabajo nros. 12 y 14, noviembre de 2002.

¹⁹ "La situación política y el 57 Aniversario del Partido Comunista", en **Resoluciones y Declaraciones del Partido Comunista de la Argentina 1974**, cit., p. 111.

democrática, integrado por civiles y militares patriotas, peronistas y no peronistas, sustentado por un gran frente democrático, antioligárquico y antimperialista", que retomara el cauce abierto en 1973²⁰. Similares peticiones se reiteraban, aunque en un tono más urgente y dramático, en la declaración del CC a propósito de la conmemoración del 1ro. de mayo de 1975²¹, mientras la denuncia de la "Triple A" y la "complicidad de algunos sectores del oficialismo y de ciertos grupos de los servicios de seguridad" en su actuación eran el eje de un documento emitido ese mismo mes.²²

Para entonces, transcurrido casi un año en el poder, el gobierno de "Isabel" no sólo no se encaminaba en la dirección aconsejada por el PCA (desde una posición enunciativa que reflejaba su voluntad de ser considerada una fuerza más del juego político legítimo, tanto como la dificultad para lograrlo), sino que preparaba el más enérgico, decidido y antipopular cambio de rumbo de su gestión, cristalizado en junio de 1975 con el anuncio del plan económico del nuevo ministro del área, ing. Celestino Rodrigo. Un documento del CE partidario emitido a mediados de ese mismo mes denunciaba: "Se completa de esta manera, en lo económico, el viraje a la derecha operado dentro del gobierno" desde la muerte de Perón, en un abandono franco del programa del '73 que "tiende a adaptar el país a la crisis capitalista mundial, a 'chilenizar' la Argentina".²³ Tras el examen crítico de las medidas anunciadas, el documento proponía un plan mínimo alternativo, cuya efectivización requería "la movilización de masas, su accionar organizado en una coalición democrática que sirva de sostén a un gabinete cívico-militar de amplia coincidencia nacional que transforme en realidad los anhelos de nuestro pueblo".²⁴ La huelga general de 48 horas, dispuesta por la CGT para los días 7 y 8 de julio, recibió el apoyo del PCA, en un documento que insistía en la urgente necesidad de elaborar una "plataforma de gobierno que sea común para el 80% de los argentinos que en 1973 votaron por cambiar radicalmente de rumbo la política interna y externa, económica y social que practicó desde 1966 la dictadura

²⁰ "¡Unidad de todas las fuerzas patrióticas, civiles y militares, dentro y fuera del gobierno, contra los planes y la política de la derecha antinacional y antipopular!", 22/03/75, en **Resoluciones y Declaraciones del Partido Comunista de la Argentina, 1975**, cit., pp. 19-24.

²¹ "¡Por un 1ro. de Mayo de unidad, para derrotar el avance de la derecha y la conspiración golpista!", 25/04/75, en Id., pp. 29-34.

²² "Unidad y movilización contra el terrorismo fascista al servicio del imperialismo. Declaración del Comité Central", 03/05/75, en Id., pp. 36-39.

²³ "El Partido Comunista responde al Plan Rodrigo. Documento del Comité Ejecutivo", 17/06/75, en **Resoluciones y Declaraciones del Partido Comunista de la Argentina, 1975**, cit., pp. 40 y 47.

²⁴ Idem, p. 52. Al igual que en otros documentos, previos y posteriores, entre las medidas propuestas por el PCA se cuenta la concreción de los acuerdos comerciales y crediticios firmados con los países del bloque socialista en tiempos del ministro Gelbard.

reaccionaria y antinacional", plataforma que debía servir de fundamento al "gabinete cívico-militar de amplia coalición democrática" a constituirse, previa conformación de un "Centro Coordinador" de "todas las fuerzas políticas, sociales y culturales" convergentes.²⁵

¿A qué "fuerzas" interpelaban privilegiadamente estos llamamientos "unitarios" del PCA, en la crítica coyuntura política de mediados de 1975? Rara vez se referían explícitamente a otras fuerzas de izquierdas, peronistas o no peronistas (excepto para denostarlas como corrientes de "ultraizquierda" cuyas acciones, especialmente las armadas, resultaban a su juicio, consciente o inconscientemente, "provocadoras" y, en tanto tales, funcionales a "la reacción").²⁶ Tampoco, desde luego, a las "minorías antinacionales" (imperialismo yanqui, terratenientes, burguesía monopólica local articulada con los anteriores) que buscaban frustrar el "proceso de liberación". Los interlocutores anhelados solían ser los "partidos políticos democráticos y populares" (especialmente el radicalismo, pero asimismo el partido Intransigente, sectores de la democracia cristiana, socialistas populares, demoprogresistas...). También organizaciones corporativas del trabajo o el capital como la CGT, la CGE o "las auténticas organizaciones que representan al agro", y crecientemente, a medida que avanzaba el deterioro del gobierno isabelino, sectores militares presuntamente "patrióticos" y legalistas. A este último respecto, es significativa la peculiar interpretación que efectuara el PCA de la calculada pasividad de la cúpula militar ante la enérgica resistencia obrera y popular al "Rodrigazo":

"(El PCA) Considera, también, que el restablecimiento de la unidad pueblo-fuerzas armadas es necesidad imperiosa. El hecho de que las fuerzas armadas se rehusaran a reprimir la actual lucha obrero-popular, crea condiciones mejores para lograr ese objetivo patriótico. Tal unidad será sólida y duradera si se funda en la democracia, en la lucha contra la dependencia, por la liberación y en la justicia social."²⁷

²⁵ "En apoyo del paro y por un gabinete cívico-militar de amplia coalición democrática. Declaración del Comité Ejecutivo", 05/07/75, en **Resoluciones y Declaraciones del Partido Comunista de la Argentina, 1975**, cit., pp. 61-62.

²⁶ A este respecto, ciertos tramos de la Declaración producida por la Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latina y el Caribe (celebrada en La Habana en junio de 1975), de la que participó el PCA, no deben haber resultado de fácil asimilación para los moderados dirigentes locales. Por ejemplo, aquellos referidos a la necesidad de que el movimiento revolucionario latinoamericano "tiene que estar (...) plenamente preparado y dispuesto a defender, con la fuerza de las armas, las conquistas democráticas", o a que "todas las fuerzas populares y revolucionarias (deben) estar prestas a responder a la violencia contrarrevolucionaria con la violencia revolucionaria y abrir paso por las vías diversas de la acción popular, incluso la acción armada, a la decisión soberana de las mayorías", o bien a que "si la unidad antiimperialista es indispensable, la unidad dentro de ella de las fuerzas de izquierda es aún más crucial".

²⁷ Idem, p. 62. Poco después, en el semanario partidario **Nuestra Palabra** n° 114, del 24/09/75, se fantaseaba acerca de la "diversidad de formas y grados de coincidencia" entre pueblo y fuerzas armadas,

Tras la derrota del Plan Rodrigo y la pronta salida de su autor del gabinete (y de López Rega del país, en condición de “embajador plenipotenciario”), el PCA evaluó con optimismo que, luego de varios meses de existencia de un amplio “frente tácito”, habían finalmente madurado las condiciones para convocar una “Asamblea Multisectorial” que delineara un nuevo plan mínimo de gobierno, y sirviera a su vez de plataforma para constituir el largamente pregonado gabinete cívico-militar de amplia coalición democrática.²⁸ No obstante, ese optimismo se atenuaría en pronunciamientos posteriores, al advertir no sólo sobre la pervivencia de “elementos lopezreguistas y reaccionarios de diverso tipo” en el aparato estatal, sino también sobre la morosidad o indiferencia de las fuerzas interpeladas por el Partido con miras a constituir un “Centro Coordinador de las fuerzas democráticas para sacar al país del atolladero y hacer imposible un golpe de estado”, fuerzas a las que sin embargo se continuaba ofreciendo un plan de emergencia para su discusión.²⁹ Un tono similar impregnaba la declaración del CE partidario del 15 de agosto de 1975, a raíz del recambio de gabinete que incluyó en éste al cnel. Damasco, Antonio Cafiero y Angel Robledo, recambio que originaría la casi inmediata reacción adversa de las cúpulas militares, hostiles al compromiso de un oficial en actividad en funciones ministeriales de un gobierno cuyo acelerado desgaste preferían observar “desde afuera”, bajo la apariencia del “profesionalismo”, para mejor legitimar su futuro desplazamiento. Consecuencia de esa reacción, a fines de agosto se produjeron simultáneamente el alejamiento de Damasco del gabinete y la designación del gral. Jorge Rafael Videla como nuevo comandante en jefe del Ejército.

manifestadas tanto en “la lucha contra la expresión fascitizante del lopezreguismo —en lo que se diera en llamar tácito acuerdo cívico-militar— con las masas en la calle y el asentimiento militar a las luchas populares”, como en “la democratización y toma de conciencia que se sigue operando entre el personal militar. Sectores de la oficialidad analizan con sentido crítico al capitalismo como formación económico-social incapaz de dar solución a los problemas del pueblo y de la Nación; precisan el enemigo fundamental en las empresas monopolistas y se desarrolla un creciente sentimiento antiimperialista; a la vez se mira a los países socialistas con creciente espíritu de investigación, estudio y comprensión y se sigue con atención los procesos de los países que habiendo roto la dependencia adoptan formas de desarrollo no capitalista”. Según el extraviado articulista, en ese contexto “cobran vuelo las declaraciones del comandante, Gral. Videla, al ubicar el problema del terrorismo como un problema de dimensiones políticas, sociales y económicas, las que interpretan el sentir de vastos sectores del arma” (p. 7).

²⁸ Comité Ejecutivo del Partido Comunista: “Ahora, hacia una gran Asamblea Multisectorial. Declaración del Partido Comunista”, 22/07/75, en **Resoluciones y Declaraciones del Partido Comunista de la Argentina, 1975**, cit., pp. 64-66.

²⁹ CC del PCA: “Propuesta del Partido Comunista para salir de la crisis”, 06/08/75, en **Resoluciones y Declaraciones del Partido Comunista de la Argentina, 1975**, cit., p. 72.

Precisamente por esos días cruciales³⁰, las resoluciones oficiales del PCA registraban, si no deslumbrantes novedades, sí énfasis nuevos sobre viejos tópicos. Por un lado, insistían en las crecientes posibilidades de que se produjera un golpe de Estado “reaccionario”, pero con rasgos específicos, “a la chilena”, el temido “pinochetazo”. Así se verifica, por ejemplo, en un documento del CC, fechado el 12 de septiembre, en reclamo contra la larga prisión del secretario general del PC trasandino, Luis Corvalán, cuya libertad representaría “un golpe a la dictadura chilena y también a los que en nuestra patria sueñan y conspiran por un pinochetazo”.³¹ La referencia reaparecía pocas semanas después, al denunciar el CC que: “Los sectores reaccionarios y neofascistas, dentro y fuera del gobierno, contribuyen con sus incitaciones macartistas, enderezadas a provocar el clima para un golpe sangriento al estilo de Pinochet en Chile.”³² Por otro lado, el breve interinato presidencial de Italo Luder pareció abrir en el PCA –al igual que en parte del oficialismo, en otras fuerzas políticas y en corrientes militares– la expectativa de un desplazamiento “legal” de Isabel Perón de su cargo, operación alentada por el propio Luder y parte de su gabinete, finalmente frustrada. Sintomáticamente, ninguno de los documentos oficiales producidos por el Partido durante la breve “licencia” de “Isabel” hacía referencia alguna a su figura, ni a su eventual papel en el futuro, al tiempo que parecían albergar esperanzas en un cambio de rumbo político piloteado por el nuevo gabinete –reestructurado por el presidente interino en su primer día de ejercicio en el cargo–, con el respaldo de las fuerzas armadas (“comandadas por hombres que han reiterado su fe democrática y su decisión de defender las instituciones”), la iglesia católica, los partidos políticos (incluido el oficialista) y la clase obrera y demás fuerzas populares³³. Simultáneamente, se verificaba un discreto pero significativo desplazamiento de conceptos en la ya habitual consigna de conformación de un “gabinete cívico-militar”: se afirmaba ahora que

³⁰ A la designación de la nueva cúpula del Ejército, cabe agregar la constitución de la APEGE, central empresaria liberal de orientación abiertamente golpista; un *lock out* agropecuario impulsado por las principales entidades corporativas del sector, y una “licencia” de la presidente Isabel Perón, reemplazada interinamente durante un mes (a partir del 13 de septiembre) por el presidente del Senado, Italo Luder.

³¹ “Por la libertad de Corvalán”, 12/09/75, en **Resoluciones y Declaraciones del Partido Comunista de la Argentina, 1975**, cit., p. 99.

³² “Hay una salida. Poner en movimiento las fuerzas obreras, populares y democráticas”, 01/10/75, en **Resoluciones y Declaraciones del Partido Comunista de la Argentina, 1975**, cit., pp. 103-104. La misma advertencia reaparece en varios documentos oficiales partidarios ulteriores.

³³ Idem, pp. 104-105. Entre los comandantes militares cultores de la “fe democrática” y la defensa de las instituciones ya se encontraba, como se mencionó, el gral. Videla, quien a fines de ese mismo mes de octubre manifestaría tales valores en la Conferencia de Ejércitos americanos realizada en Montevideo,

“la solución permanente para la estabilidad y el progreso de la República, sólo puede ser conseguida con un *Gobierno* cívico-militar, de amplia coalición democrática, que refleje la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo argentino, decidido a conquistar su liberación nacional y social”.³⁴

Hacia fines de 1975, la veloz erosión del gobierno peronista resultaba inocultable. A la conformación de una comisión parlamentaria para investigar la actuación del ministerio de Bienestar Social, en septiembre, se agregaron la indagación de la Fiscalía Nacional sobre irregularidades en la contratación de obras del faraónico “altar de la Patria” lopezreguiano en octubre, un pedido de juicio político de la presidente por parte del bloquismo sanjuanino, la fractura del propio peronismo parlamentario y sindical entre “verticalistas” y “antiverticalistas” (partidarios del desplazamiento de Isabel), y la rebelión de un sector de la fuerza aérea, en diciembre. En ese contexto, el PCA, a través de su CE, volvió a advertir sobre la existencia de una “emergencia nacional” y de “turbios personajes que sueñan con un baño de sangre a lo Pinochet”. Amén de condenar tanto la posibilidad de un golpe de Estado como al “terrorismo individual o de grupo como método de lucha para lograr las transformaciones progresistas necesarias”, el PCA subrayaba la “gran responsabilidad” del Partido Peronista ante el pueblo y la Nación, de “superar a la brevedad posible su crisis interna, desarraigando totalmente al lopezreguismo, llevando a fondo las investigaciones sobre manejos delictuosos de asuntos públicos y, sobre todo, volviendo a las fuentes: las Pautas Programáticas”. El mismo documento reiteraba la necesidad de retornar “a la política del diálogo” para conjurar la crisis, exhortaba a la CGT a poner en juego su poder de convocatoria para llamar a “la multisectorial que el país necesita”, y estimaba que, “si el poder paralelo introduce elementos de perturbación, la incorporación de las Fuerzas Armadas al gabinete nacional sería altamente positiva”³⁵.

En ese caldeado clima político, el 28 y 29 de noviembre de 1975 el PCA celebró su VIII Conferencia Nacional, con el fin de evaluar la aplicación de la línea política y táctica adoptada en el XIV Congreso Nacional de 1973. La extensa “Resolución Política” aprobada, inspirada en un informe elevado por el secretario general Gerónimo

afirmando que “si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país”.

³⁴ Idem, p. 106. La cursiva es nuestra. Si bien tal consigna no era completamente nueva, desplaza crecientemente a la predominante hasta entonces, de constitución de un “gabinete cívico-militar”. La propuesta formal de “gobierno cívico-militar” reaparecería en la “Resolución política” de la VIII Conferencia Nacional del PCA, realizada a fines de noviembre de 1975, y en documentos posteriores.

³⁵ “La unidad salvará a la democracia y la democracia salvará a la Nación”, 06/11/75, en **Resoluciones y Declaraciones del Partido Comunista de la Argentina, 1975**, cit., pp. 120-122.

Arnedo Alvarez, contiene interesantes elementos para aprehender el posicionamiento partidario en esa coyuntura, menos de cuatro meses antes de la consumación del golpe de Estado. La “situación de emergencia nacional”, signada por “la inestabilidad política y la profunda crisis económica en curso”, era atribuida, como en ocasiones anteriores, al “abandono del programa de 1973” tras la muerte de Perón, e incluía para el PCA, entre diversos ingredientes, algunos que sólo adquieren significación en tanto mensajes destinados a tocar la cuerda presuntamente “nacionalista” de las fuerzas armadas: por ejemplo, el hecho de que “se debilita peligrosamente la defensa de nuestras fronteras” (sic), a punto tal que, particularmente debido a la supuesta agresividad de la dictadura brasileña, “*no sería prudente subestimar la magnitud de la amenaza que se cierne sobre la soberanía e integridad de la Nación*”, o que, en caso de producirse un nuevo golpe de Estado alentado por la CIA y las ultraderechas locales, “la Argentina correrá el riesgo de transformarse en el ‘socio menor’ de Brasil, a su vez ‘socio dependiente’ de los Estados Unidos.”³⁶ No faltaban tampoco las habituales referencias a las para entonces imaginarias “tradiciones democráticas y emancipadoras” de las fuerzas armadas, “orgullo para los argentinos”, ni lo “auspicioso” que resultaba comprobar que “muchos integrantes de las fuerzas armadas piensan que deben rechazar la tentación del golpe de estado, que no solamente los aleja del pueblo sino que también quiebran (sic) su unidad orgánica”. Si bien el PCA entendía que tales fuerzas “no deben intervenir en el proceso político argentino como amos del poder o como poder paralelo”, aprobaba en cambio que “sus representantes deben integrar el gabinete en igualdad de condiciones que los civiles”.³⁷ Pese a lo delicado de la coyuntura política, el documento, aunque verificaba que “la presión derechista es actualmente muy intensa”, señalaba que “lo es también la presión de las masas”, cuyo “giro a la izquierda” no podían dejar de tener en cuenta los partidos políticos, las fuerzas armadas ni la iglesia.³⁸ El PCA juzgaba en consecuencia que “*aún no se ha definido el acto último de esta etapa de la crisis nacional*”,

³⁶ “VIII Conferencia Nacional del Partido Comunista. Resolución Política”, s/f (fines de noviembre de 1975), en **Resoluciones y Declaraciones del Partido Comunista de la Argentina, 1975**, cit., pp. 123-125. Las cursivas en el original. La preocupación por el papel brasileño en la región fue objeto por entonces de un trabajo específico de Rodolfo Ghioldi: **¿Hegemonía brasileña en el cono sur?**, Buenos Aires, ed. del autor, s/f (probablemente 1976).

³⁷ Idem, p. 130. Coincidentemente con estas positivas valoraciones de la tradición militar “sanmartiniana” emitidas por el PCA, las fuerzas armadas extendían su brutal acción represiva a todo el país, en virtud de los decretos de “aniquilamiento de la subversión” emitidos poco antes bajo el interinato presidencial de Luder.

³⁸ Idem, p. 126. La expresión parece recuperada de un célebre documento partidario elaborado por Victorio Codovilla en 1962, titulado **El significado del giro a la izquierda del peronismo**, Buenos Aires, Anteo, 1962.

proponiendo como salida a dicha crisis una plataforma de puntos básicos (referidos a lo político, lo económico, lo social y la política exterior) para poder arribar a un “convenio nacional democrático”³⁹.

Entretanto, la escalada de violencia política, agravada en los meses finales de 1975, motivó al CE del PCA a emitir, a comienzos de diciembre, un documento donde se interrogaba acerca de las finalidades de la “barbarie desenfrenada de la ultraderecha y de la ultraizquierda”, al tiempo que rescataba la “declaración oportuna” del Comando General del Ejército condenando un sangriento episodio de violencia en Tucumán (en realidad, una evidente represalia ilegal contra militantes de izquierda), “pues el desencuentro entre fuerzas armadas y pueblo se hace más profundo a cada brote de barbarie”. El documento finalizaba convocando una vez más a conformar una “Asamblea Multipartidaria”, no sin antes exhortar, ambiguamente, a “¡Que las Fuerzas Armadas sepan dar a tiempo los pasos necesarios para poner fin a ese desencuentro, que en las condiciones actuales puede ser fatal para el porvenir de la República!”.⁴⁰ A mediados del mismo mes de diciembre, el CE condenó el alzamiento de un sector de la fuerza aérea, valorando que “es justo defender las instituciones y confiar en la voluntad del pueblo expresada en las urnas, como lo ha declarado el Comandante en Jefe del Ejército, general Videla, al expresar su desacuerdo con los golpistas”, y reiteró la necesidad de constituir un “gobierno cívico-militar”, pues sólo éste podía “ser una garantía de la continuidad institucional (sic), del retorno a las Pautas Programáticas (de 1973) y del curso democrático y progresista que anhela la inmensa mayoría de nuestro pueblo”.⁴¹

Los meses iniciales de 1976 vieron multiplicarse las más diversas iniciativas políticas, tanto oficialistas como opositoras, con el horizonte común del golpe de Estado ya firmemente instalado en la opinión pública y en los medios políticos, periodísticos, empresarios y, obviamente, militares. El gobierno isabelino procedió, entre enero y febrero, a una reorganización del gabinete (catalogada de “neo-lopezreguista” por sus críticos), y al anuncio de elecciones generales para diciembre de ese año, mientras aparentemente se esperaba con que la adopción de un programa económico

³⁹ Cursivas en el original. Los puntos básicos se encuentran desarrollados en “VIII Conferencia Nacional del Partido Comunista”, cit., pp. 133-136.

⁴⁰ “Frente a la ola de crímenes que invade el país”, 04/12/75, en **Resoluciones y Declaraciones del Partido Comunista de la Argentina, 1975**, cit., pp. 137-138.

⁴¹ “El Partido Comunista condena el golpe”, 19/12/75, en **Resoluciones y Declaraciones del Partido Comunista de la Argentina, 1975**, cit., pp. 143-144.

impopular y la concesión de mayores atribuciones a las fuerzas armadas en materia de “seguridad interna” paralizarían la intervención militar. La UCR, por su parte, alentó sin éxito la reunión de la Asamblea Legislativa para declarar la “inhabilidad” de la presidente, mientras que el 19 de marzo se realizaron activas gestiones políticas –de las que participaron la UCR, el PJ, el PI, el Partido Revolucionario Cristiano, el PCA, la Democracia Progresista y el Socialismo Popular– con el fin de plasmar un acuerdo pluripartidario para aplicar un programa económico-social de emergencia. En una nota titulada “Acción unida ante el país en peligro”, el periódico semanal del PCA, en su edición fechada el día mismo del golpe de Estado, daba cuenta de esas negociaciones:

“El pueblo argentino se encuentra sobrecogido, como nunca en su historia, por la ola de sangre que cubre a todo el país, a lo cual se agrega la angustia por el deterioro del nivel de vida y por los anuncios de golpes de Estado que quebrarían la vigencia de las instituciones, anuncios que se multiplican al entrar en prensa esta edición en la mañana del 23. El país está ante un grave peligro. Por eso, las masas populares miran esperanzadas las reuniones de la UCR, el PI, el PC, el PRC y el PSP, con el representante del PJ, Escribano Bittel, tratando de encontrar los puntos de coincidencia con todas las fuerzas democráticas y patrióticas para salvar a la Nación. El Partido Comunista, que valora altamente estos pasos unitarios, bregará con toda decisión para que alcancen señalados éxitos y para que tal tipo de organización, multipartidaria y multisectorial, se extienda a todo el ámbito del país”.⁴²

*

El PCA frente a los primeros pasos de la dictadura del P.R.N. (1976-1977)

“Ayer, 24 de marzo, las fuerzas armadas depusieron a la Presidente María Estela Martínez reemplazándola por una Junta Militar integrada por los comandantes de las tres armas. No fue un suceso inesperado. La situación había llegado a un límite extremo ‘que agravia a la Nación y compromete su futuro’ como se dice en uno de los comunicados de las fuerzas armadas. Cargan, por esta situación, inmensa responsabilidad el lopezrreguismo reaccionario y su protectora María Estela Martínez, que habían pisoteado el programa por el cual había votado el pueblo en 1973 y que en la etapa anterior había empezado, aunque con timidez e inconsecuencia, a realizarse. Comparten la responsabilidad jerarcas sindicales que sofocaron al movimiento obrero”.⁴³

Con estas tempranas, condescendientes e iluminadoras palabras se iniciaba el primer análisis “marxista-leninista” público y oficial del CC del PCA sobre el golpe de Estado de marzo de 1976, que inauguró el infame e interminable “Proceso de Reorganización Nacional”. En el prólogo a la recopilación documental que incluye tal pronunciamiento (editada en 1978), éste es (auto)calificado modestamente como “una pieza liminar entre los documentos políticos en general aparecidos entonces, por su enfoque objetivo y científico, para comprender la complejidad del momento histórico

⁴² **Nuestra Palabra** n° 40, 24/3/1976, p. 1.

⁴³ “Los comunistas y la nueva situación argentina. Declaración del Partido Comunista”, CC del PCA, 25/03/76, en **Resoluciones y Declaraciones, 1976-1977**, Buenos Aires, Editorial Fundamentos, 1978, p. 10.

que nos tocaría vivir”. Efectivamente, la pieza resultaba “liminar” en varios sentidos. Establecía un límite hasta entonces nunca tan abiertamente traspasado por la dirección del PCA, el de la vergonzosa complicidad con el gral. Videla y otros militares cultores de la “fe democrática” y las “instituciones”, elogiados como tales en los documentos partidarios de 1975-1976, pero ahora instalados en el ejercicio absoluto del poder. También potenciaba un estilo de intervención política que, si bien ya ensayado antes del golpe –como se desprende de muchos de los documentos ya analizados–, alcanzaría en los años iniciales del PRN cotas difíciles de superar, estilo consistente en intentar validar las propias posiciones incluyendo fragmentos de –o parafraseando– declaraciones de los líderes de la facción presuntamente “democrática” del gobierno y la oficialidad militares, especialmente del presidente Videla, asignando a tales declaraciones plena sinceridad y sentido literal.

La adaptación de la posición política y táctica del Partido a la nueva situación es conocida –al menos en sus líneas generales–, y se prolongaría prácticamente hasta la crisis de la dictadura: consumado el golpe, brindó su apoyo a una supuesta ala “moderada” (cuando no “democrática y progresista”) del régimen militar, encarnada, a sus ojos, por oficiales como el presidente Jorge Videla o su sucesor Roberto Viola, como contrapeso frente a las acechanzas de un ala presuntamente “pinochetista”. Las críticas se centraron preferentemente en la política económica “liberal” de Martínez de Hoz, y aun en este terreno encontraron su contracara en las ilusiones por el sesgo más “desarrollista” de algunos altos funcionarios (como el efímero ministro de Planeamiento –y connotado teórico de la “guerra contrarrevolucionaria”–, gral. Díaz Bessone). El documento “liminar” del 25 de marzo esbozaba ya esta línea, abriendo múltiples créditos a –y expectativas de fructífera interlocución con– la recién estrenada dictadura (no designada como tal en los documentos partidarios), empezando por las dudas partidarias acerca de la naturaleza última de ésta, y el pragmatismo político más rudimentario elevado a la categoría de análisis “marxista-leninista”:

“El Partido Comunista siempre se pronunció contra los golpes de estado. La experiencia indica que desde 1930 los golpes de estado tuvieron por objeto defender el latifundio improductivo y aumentar el grado de dependencia del país. *Esta vez ¿se romperá esa nefasta tradición?* El Partido Comunista está convencido de que *no ha sido el golpe del 24 el método más idóneo para resolver la profunda crisis política y económica, cultural y moral*. Pero estamos ante una nueva realidad. Estamos ante el caso de juzgar los hechos como ellos son. Nos atendremos a los hechos y a nuestra forma de juzgarlos: su confrontación con las palabras y promesas.”⁴⁴

⁴⁴ Idem, p. 11. Las cursivas son nuestras.

Los objetivos de “los actores de los sucesos del 24”, tal como éstos los enunciaron en sus primeros documentos, podían resumirse, según la particular exégesis del PCA, en:

“Fidelidad a la democracia representativa con justicia social, revitalización de las instituciones constitucionales, reafirmación del papel de control del Estado sobre aquellas ramas de la economía que hacen al desarrollo y a la defensa nacional, defensa de la capacidad de decisión nacional. El Partido Comunista, aunque no comparte todos los puntos de vista expresados en los documentos oficiales, no podría estar en desacuerdo con tales enunciados, pues coinciden con puntos de su Programa, que se propone el desarrollo con independencia económica; la seguridad con capacidad nacional de decisión, soberanía y justicia social”.⁴⁵

Aunque el documento consideraba “un serio error” (sic) la suspensión de la actividad de los partidos políticos, reivindicaba la “lucha por la multipartidaria” previa al golpe como “un gran aporte a las soluciones nacionales”, y aseguraba que “la opinión pública espera sean puestos en libertad los presos sin causa ni proceso y sea abolida la pena de muerte”. Asimismo, el PCA

“considera auspicioso que la Junta Militar haya desechado una solución pinochetista. Sin embargo, nadie tiene derecho a desarmarse. En el seno de las fuerzas armadas y fuera de ellas se esconden también pinochetistas. El enemigo interno y externo está en acecho. Los imperialistas y fascistas sueñan con el pinochetazo, con un baño de sangre. ¡Sepa la voluntad y la unidad democrática de nuestro pueblo impedir tales desbordes medievales!”⁴⁶

Finalmente, el documento reiteraba su propuesta de “Convenio nacional democrático que sirva de fundamento a un gobierno cívico-militar de amplia coalición democrática”, considerando que si la Junta Militar “es una transición al tipo de gobierno que el país necesita, se habría dado un paso adelante”, pues “se derrumbaría la barrera que separa las fuerzas armadas del pueblo”, proceso para el cual el PCA “confía en que las fuerzas armadas sean fieles al mensaje sanmartiniano”.⁴⁷

Al cumplirse seis meses de dictadura, el PCA, en un documento intitulado “Es la hora del diálogo abierto y fecundo” (firmado por el secretario general y otros veteranos dirigentes partidarios), asignaba valor de verdad a tramos cuidadosamente escogidos de una inspirada pieza oratoria del gral. Videla en Tucumán, de “indudable importancia”, pues

“Confirma enunciados programáticos y condiciones mínimas de convivencia hacia la Fundación de un orden justo para todos, sin excepciones: para gobernantes y gobernados; para la solución pacífica de las controversias sectoriales; para quienes aspiran a competir con sus méritos y conductas por las posiciones de mando, y para quienes inicien el curso honorífico de su vocación por el bien público; para quienes se arriesgan con su espíritu de empresa, y para quienes abonan con su trabajo el esfuerzo común; para quienes quieran enseñar y aprender; y para que los que

⁴⁵ Idem, *ibid.*

⁴⁶ Idem, p. 12. Cabe recordar que el PCA, a diferencia de otras fuerzas de izquierda, no fue prohibido por las autoridades del Proceso.

⁴⁷ Idem, p. 14.

trabajan reciban prestaciones dignas y no dependan de caprichos demagógicos; para que se pueda criticar y aplaudir sin temores”.⁴⁸

Retomando el lugar de enunciación monitorial que había impregnado a numerosos documentos previos, los dirigentes partidarios firmantes, imposibilitados a esa altura de siquiera fingir ignorar los alcances sin precedentes del dispositivo represivo desplegado por la dictadura, evitaban sin embargo responsabilizar por él directamente al gobierno, al que por el contrario aconsejaban, por su propio bien,

“escuchar —y proceder en consecuencia— los angustiosos requerimientos del pueblo y las altas voces que se han alzado contra el crimen terrorista. Antes que nada, *hay que poner fin al baño de sangre que está sufriendo el país y que apunta también al deterioro del gobierno y a la inestabilidad política*. Esa es la tarea primordial del momento que vivimos, y que toda la ciudadanía patriótica reclama, dispuesta a brindar su decidido apoyo para poner fin a este flagelo nacional. (Sin hablar ya de las miles de víctimas de la represión y del terrorismo, de uno y de otro signo; tan solo los comunistas tienen en este momento, más de 200 presos injustamente detenidos, antes y después del 24 de marzo, cantidad de asesinados y torturados, y decenas de secuestrados que no aparecen desde hace meses, y por cuyas vidas hay serios temores.)”⁴⁹

En el mismo registro discursivo, se criticaban “las recetas e imposiciones del Fondo Monetario Internacional que sostiene Martínez de Hoz”, conducentes a la “entrega del patrimonio nacional”, al tiempo que se aconsejaba “que lo tengan en cuenta las autoridades que se designen para el nuevo Ministerio de Planeamiento que se anuncia”. El balance final de la dirigencia comunista, nuevamente legitimado en el papel de los militares fundadores de la nacionalidad, resultaba no obstante alentador:

“En una carta del 25 de diciembre de 1976, Manuel Belgrano aconsejaba a San Martín: ‘La guerra no sólo la ha de hacer Ud. con las armas, sino con la opinión’. La opinión democrática de la inmensa mayoría del país, que rechaza el pinochetismo, apoyará decididamente *aquellos enunciados programáticos formulados por el Presidente Videla en Tucumán, y que por su carácter democrático y progresista pueden contribuir a la construcción, entre todos, de la Argentina que queremos*”.⁵⁰

Diversos documentos posteriores ratifican en lo esencial los ejes de los pronunciamientos “liminares” del Partido tras el golpe de Estado. La “Carta con motivo de fin de año”, dirigida “A los afiliados y amigos, a sus familiares, a los camaradas presos y secuestrados” por el secretario general, Arnedo Alvarez, insistía en que

“lo que está en juego es la conquista de una democracia avanzada o el pinochetismo. Esos dos proyectos enfrentados conviven todavía dentro del proceso abierto por la Junta Militar. Un sector relevante del gobierno y de las fuerzas armadas, que incluye en primer lugar al propio presidente de la República, reitera casi cotidianamente que es su propósito erradicar el terrorismo, de cualquier signo, para consolidar la paz y la seguridad teniendo como objetivo

⁴⁸ Gerónimo Arnedo Alvarez, Rodolfo Ghioldi, Rubens Iscaro, Pedro Tadioli y Oscar Arévalo: “Es la hora del diálogo abierto y fecundo”, 25/09/76, en **Resoluciones y Declaraciones, 1976-1977**, p. 17.

⁴⁹ Idem, p. 18. Las cursivas son nuestras.

⁵⁰ Idem, pp. 19-20. Las cursivas son nuestras.

prioritario la revitalización de las instituciones y el retorno a la democracia auténticamente representativa, republicana y federal.

Esos mismos voceros hablan de convocar a todos los sectores del país para elaborar primero y ejecutar después, el llamado Proyecto Nacional (...), para lo cual nosotros estamos dispuestos a aportar lo mejor de nuestras ideas y de nuestra acción concreta.

El otro sector, onnubilado por un odio irracional, de raíz fascista, se propone (sic) un baño de sangre generalizado.”⁵¹

En febrero de 1977, un reportaje concedido por Videla dio una nueva oportunidad a la dirigencia partidaria para elogiar su “mensaje saludable” (pues sus ideas interpretaban “el sentimiento de la mayoría de nuestro pueblo y merecen nuestro acuerdo”), y exhortar “a todos los sectores sociales (...) a responder a este llamado presidencial con una amplia unidad y una puesta en marcha que impulse el diálogo fecundo y la apertura política que el país reclama.”⁵² Para entonces, las crecientes denuncias en el exterior sobre la acción represiva (la “campana antiargentina”, según la jerga oficial) ya eran motivo de preocupación en el gobierno y las altas jerarquías militares argentinas. Afortunadamente para éstas, el PCA emitió un documento que comenzaba criticando duramente al flamante gobierno estadounidense de James Carter, el cual, “erigido en tribunal supremo que se atribuye el derecho a juzgar a las demás naciones del mundo, ha interferido en asuntos internos de nuestro país esgrimiendo hipócritamente el argumento de la violación de los derechos humanos”, para luego destacar positivamente declaraciones videlianas que aseguraban que “ya terminó la hora del silencio”. Para el PCA, los únicos “obstáculos” para “toda solución que tienda al establecimiento de una democracia renovada” residían en “las medidas económico-sociales del equipo Martínez de Hoz” y la violación de derechos humanos “por terroristas de diverso signo”.⁵³ El mensaje presidencial con motivo del primer año de dictadura, que entraba entonces, según Videla, en un “período de creación” signado por

⁵¹ G. Arnedo Alvarez: “Carta con motivo de fin de año”, 20/12/76, en **Resoluciones y Declaraciones, 1976-1977**, pp. 27-28. Otro alto dirigente partidario, Orestes Ghioldi, había publicado, pocas semanas después del golpe de estado, un opúsculo intitulado **Democracia renovada o pinochetismo**, Buenos Aires, ed. del autor, mayo de 1976. El propio Arnedo Alvarez, por su parte, sistematizó sus aportes en dos trabajos de ese mismo año: “¡Más impulso a la acción de masas contra el pinochetismo, por el pan, la libertad y la democracia!” (Buenos Aires, mimeo, agosto de 1976), y “Ahora avanzar hacia una amplia coincidencia democrática” (Buenos Aires, ed. del autor, diciembre de 1976).

⁵² Rodolfo Ghioldi, Rubens Iscaro, Fernando Nadra, Jorge Pereyra e Irene Rodríguez: “Ante las palabras del presidente de la República”, 02/02/77, en **Resoluciones y Declaraciones, 1976-1977**, pp. 42-43.

⁵³ Rodolfo Ghioldi, Rubens Iscaro, Fernando Nadra, Irene Rodríguez, Pedro Tadioli, Oscar Arévalo y Jorge Pereyra: “Se aproximan horas definitorias”, 08/03/77, en **Resoluciones y Declaraciones, 1976-1977**, pp. 44-45. La “interferencia” que indignaba al PCA refería a un anuncio del gobierno de los EE.UU., que reduciría el crédito abierto en ese país a la Argentina para la adquisición de... armamentos, dada la “preocupación” de aquél por la situación de los derechos humanos. Como es sabido, la URSS (y sus aliados, incluida Cuba) evitó apoyar cualquier condena al gobierno argentino por esta cuestión en los foros internacionales.

la búsqueda de condiciones para una convergencia cívico-militar, también encontró cálida acogida en las primeras espadas del “marxismo-leninismo” local, las que, “Respondiendo a una reflexión presidencial, expresamos que en lo inmediato *no están en nuestro pensamiento plazos ni fechas electorales*”, puesto que a juicio del PCA lo que debía estar en el centro del debate era el “sentido transformador del proceso, para decirlo con palabras del Presidente”. Incluso las habituales críticas a la gestión económica y el reclamo de un “cambio de rumbo” en ese terreno se fundaban, entre otros argumentos, en “razones de seguridad nacional (...), para preservar la salud física y moral de las actuales y futuras generaciones de argentinos”, y en la posibilidad de que sobre “el justificado descontento popular pueden cabalgar los pinochetistas abiertos u ocultos para estimular la desestabilización”. Al mismo tiempo, la cínica consigna presidencial de “ganar la paz” era asumida como propia por el Partido, aconsejando que “contribuiría grandemente a ello la publicación de la lista de los presos con indicación de sus lugares de detención y la aparición de los desaparecidos”.⁵⁴ Dos meses después, los apoderados del PCA efectuaban una respetuosa presentación al ministro de Interior, gral. Harguindeguy, para solicitar el esclarecimiento de un asesinato, 173 detenciones y 69 secuestros de afiliados al Partido, remarcando la desvinculación de los comunistas “con las acciones terroristas de uno u otro signo”, y aclarando que, en cualquier caso, “los hechos ocurridos (sic) con afiliados del Partido Comunista y de su Federación Juvenil, como también contra sus bienes materiales, no han alterado nuestro enfoque global del conjunto de los problemas nacionales”, consistente en “clarificar y ayudar a encontrar los mejores senderos que conduzcan a alcanzar un diálogo franco y fecundo entre pueblo y Fuerzas Armadas”.⁵⁵

En agosto de 1977, transcurrido casi un año y medio de dictadura procesista, el PCA dio a conocer un extenso documento sobre la urgente necesidad de un “convenio nacional democrático”, fundamentado en múltiples citas de declaraciones del presidente Videla. Las cuatro propuestas orientadas en ese sentido eran la “apertura inmediata de un diálogo democrático y sin discriminaciones (...) a fin de acordar como se ha dicho: ‘un cuerpo de ideas y un necesario plan de acción para instrumentarlas’ ”; un acuerdo “para poner fin al terrorismo y garantizar la vigencia plena de las libertades y los

⁵⁴ Rodolfo Ghioldi, Rubens Iscaro, Fernando Nadra, Irene Rodríguez, Pedro Tadioli, Oscar Arévalo y Jorge Pereyra: “Hacia una democracia renovada”, 09/04/77, en **Resoluciones y Declaraciones, 1976-1977**, pp. 49 y 51. Las cursivas son nuestras.

⁵⁵ “Comunicado de prensa”, 08/06/77, en **Resoluciones y Declaraciones, 1976-1977**, pp. 57-58.

derechos ciudadanos”; acuerdo sobre puntos mínimos de rectificación de la política económica, y un

“acuerdo cívico-militar para un programa de gobierno, democrático, de transición; para un Proyecto Nacional de vastos alcances; y para un plan de salida política, mediante la convocatoria, en un plazo prudencial, de una Asamblea Nacional Constituyente, llamada a actualizar la Constitución vigente, aprobar el convenio nacional democrático y legitimar un gobierno de transición y de amplia coalición cívico-militar”⁵⁶

Al terminar el año 1977, la dirigencia del PCA emitió un documento que, sin dejar de señalar críticamente diversos aspectos negativos del proceso político (especialmente la política económica, la falta de “normalización del movimiento sindical” y de la actividad de los partidos políticos, la necesidad de “que se ponga fin al terrorismo de ambos signos, al derramamiento impiadoso de sangre”, las acechanzas de la CIA y los “pinochetistas”), se entusiasmaba ante la convocatoria videliana a “la construcción de una democracia genuina y estable” y su anuncio de que las fuerzas armadas formularían una propuesta política concreta en marzo de 1978, “con el fin tantas veces enunciado de plasmar la convergencia entre civiles y militares”. Según el PCA, la tarea

“exige que los integrantes de las fuerzas armadas se desprendan de sus prejuicios con respecto a los partidos políticos. Igualmente, los civiles democráticos -que constituyen la inmensa mayoría de la civilidad- deben superar concepciones antimilitaristas anacrónicas. Mientras esto no ocurra se corre el riesgo de la rotación de inestables gobiernos civiles sustituidos por gobiernos de facto militares, igualmente inestables.”⁵⁷

*

Coda

A la espera de la promisoría “democracia genuina y estable” anunciada por el más sangriento y antipopular régimen de la Argentina moderna, concluía la intervención política del PCA a fines de 1977, límite temporal de este trabajo. Ciertamente, como es sabido, las múltiples formas de colusión entre fuerzas políticas “democráticas” (por no hablar de las derechas) y dictadura estuvieron lejos de ser excepcionales⁵⁸, pero, a diferencia del PCA, aquéllas no pretendían asumir el rol de “vanguardia de la clase

⁵⁶ Rodolfo Ghioldi, Rubens Iscaro, Irene Rodríguez, Fernando Nadra, Pedro Tadioli, Oscar Arévalo, Jorge Pereyra: “¡El diálogo y la apertura que el pueblo reclama! Para un convenio nacional democrático que impulse el progreso de la Patria y el bienestar del pueblo”, 10/08/77, en **Resoluciones y Declaraciones, 1976-1977**, p. 68.

⁵⁷ Rodolfo Ghioldi, Rubens Iscaro, Pedro Tadioli, Irene Rodríguez, Jorge Pereyra, Fernando Nadra y Oscar Arévalo: “Sobre la propuesta política y la apertura del diálogo”, 26/12/77, en **Resoluciones y Declaraciones, 1976-1977**, pp. 88-92.

⁵⁸ A este respecto, pueden consultarse, entre otros, los trabajos ya clásicos de Hugo Quiroga, María de los Angeles Yanuzzi y César Tcach.

obrera y el pueblo” en la “batalla antioligárquica y antimperialista, camino al socialismo”. Asimismo, la subestimación de la posibilidad y, sobre todo, de la naturaleza y alcances del golpe y de la dictadura que éste instauró, tampoco fue privativa del PCA, aun en el campo de las izquierdas, que por definición suelen prestar cuidadosa atención a las posibilidades de sufrir represión estatal o paraestatal.⁵⁹ Pero, ciertamente, es probable que haya sido el Partido Comunista la organización política izquierdista que contara –dados sus contactos con sectores del poder, incluso castrenses, para no hablar de sus estrechos vínculos con una entonces superpotencia mundial como la URSS– con información más temprana y fidedigna acerca de los tiempos que se inaugurarían el 24 de marzo de 1976 (y, por ende, con más posibilidades de trazar una política consistente con la preservación de su militancia, y menos “ilusionada” acerca de las supuestas diferencias de fondo entre militares “democráticos” y “pinochetistas”). Y aunque la práctica de diferenciar corrientes y matices al interior del poder militar, para intervenir políticamente a la luz de tales distinciones, no era nueva en el PCA (ni, desde luego, en otras organizaciones de la izquierda argentina y mundial), esa posición privilegiada, sumada a la dura experiencia de la represión a sus propios militantes, torna aún más enigmática –aunque no menos penosa– su política frente a la dictadura del “Proceso de Reorganización Nacional”. Sin duda, la tradicional fidelidad del PCA a las orientaciones de la política exterior de la URSS –que, como es sabido, mantuvo excelentes relaciones diplomáticas y, sobre todo, comerciales con la Argentina en aquellos años– es un elemento que, si bien no puede desdeñarse a la hora de ensayar hipótesis sobre el comportamiento del PCA, tampoco debe unilateralizarse (como es frecuente en la escasa literatura académica y, sobre todo, en la producida por vertientes políticas críticas del comunismo local). Un estudio en profundidad seguramente deberá atender también a dimensiones tales como las propias concepciones partidarias acerca de la revolución, sus potenciales sujetos y su “vanguardia”, concepciones modeladas a

⁵⁹ Por ejemplo, las dos más relevantes organizaciones de matriz trotskista, el Partido Socialista de los Trabajadores y Política Obrera, aún con sus diferencias, coincidieron, en términos generales, en la minimización de la posibilidad, alcance y significado del golpe de Estado, y argumentaron en torno de la relativa continuidad de la situación anterior a marzo del 76: “pre-revolucionaria” (PST) o “revolucionaria” (PO), situación que se habría abierto con el ciclo de movilizaciones de masas inaugurado con el Cordobazo, y profundizado con las grandes huelgas de junio y julio de 1975 contra el Plan Rodrigo. De allí la recurrencia de caracterizaciones de la situación posterior al golpe como “inter-revolucionaria”, “contrar-revolucionaria inestable” aunque inscripta en un “período netamente pre-revolucionario a escala mundial”, etc., al tiempo que se destacaban las diferencias entre el régimen pinochetista, ejemplo de derrota acabada de la clase trabajadora trasandina, y la situación argentina, signada por la inexistencia de enfrentamiento abierto de las masas con las FF.AA. y por la “resistencia” de aquéllas a la dictadura.

lo largo de décadas por elencos dirigentes altamente estables pero evidentemente consensuadas por una porción relevante de la militancia⁶⁰; los sistemas de creencias e imaginarios en que tales concepciones cristalizaron y, a la vez, pudieron sustentarse, y el afán de preservar al aparato partidario y sus cuadros dirigentes de embates represivos aún más brutales, entre otras posibles.

⁶⁰ A este respecto, es llamativo el hecho de que no se conozcan graves escisiones partidarias –al menos ruidosas- durante la dictadura.